

**EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA**

C O N S I D E R A N D O

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Ley, emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y de Equidad y Género del Honorable Congreso del Estado; por virtud del cual se expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales de todo régimen democrático. En tal sentido, y en el ánimo de encontrar un instrumento legal idóneo que logre la igualdad entre las mujeres y los hombres, esta Quincuagésimo Séptima Legislatura, a través de las Diputadas y los Diputados que la integran, determinaron la elaboración de la presente Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, a partir del trabajo de análisis de las iniciativas existentes en la materia, así como de las respectivas aportaciones de los distintos Grupos Parlamentarios que en el trabajo parlamentario de las Comisiones de estudio se tuvieron a bien incorporar al documento.

La igualdad entre hombres y mujeres se traduce en garantizar equidad de oportunidades y de trato entre ambos sexos en contra de toda discriminación basada en el género.

Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dos de agosto de dos mil seis, siendo mandato que cada una de las Entidades Federativas expidieran las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en la Legislatura actual la Igualdad entre Mujeres y Hombres representa un tema de gran preocupación e interés para las y los Diputados, muestra de ello son las Iniciativas de Ley en la

materia que existen, que sin lugar a dudas en conjunto con las reformas al Código de Defensa Social, al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, y la expedición de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, constituyen el punto de partida en pro de la Igualdad entre Mujeres y Hombres en nuestra Entidad, agradeciendo su legado y ejemplo a las Diputadas y Diputados que nos han antecedido en este Congreso.

De igual manera, la presentación de esta Ley, se realiza en un momento propicio para hacer un amplio reconocimiento a las Diputadas y Diputados que integran esta representación popular, ya que sus aportaciones han sido de alto valor para cristalizar esta propuesta de Ley.

Esta Ley, que representa un compromiso más de los planteados en la Agenda Legislativa 2008-2011, coincidentes con los planteamientos y aspiraciones de todos los Grupos Parlamentarios aquí representados; consolidar una sociedad más igualitaria, en donde los hombres y las mujeres reciban un trato equitativo y justo, impulsando para ello en todo momento reformas y leyes que impulsen la igualdad de género y la incorporación puntual de las mujeres a los beneficios del progreso estatal.

La lucha por lograr los objetivos de la presente Ley privilegiando el pleno respeto a las garantías constitucionales que goza todo individuo, hombre o mujer, no es, ni será, tarea fácil, por ello requerimos de consensos, coincidencias y voluntades, ubicando en el centro de este movimiento, la igualdad de oportunidades, la equidad en los beneficios de las políticas públicas y en el mismo tono, el compartimiento por igual de las responsabilidades políticas, sociales y económicas.

Durante el siglo XX, el siglo de las grandes transformaciones sociales, la mujer paso a paso, a veces lento, ha ido recuperando espacios en la vida colectiva. Su papel hoy es otro, pero todavía limitado por formas, actitudes y prejuicios.

Hoy las mujeres participan activamente en áreas del desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado.

Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general han reconocido todavía con la plenitud deseada, el papel fundamental que la mujer merece.

Muchas mujeres cumplen un doble papel en el espacio vital de la sociedad, son madres al frente de las necesidades de los hijos y también proveedoras de los hogares.

La discriminación y los obstáculos al desarrollo de las mujeres han estado tan presentes a lo largo de la historia, que nuestro esfuerzo, la tenacidad y la capacidad para superarlos representan un gran ejemplo y han sido factores importantes para el desarrollo de México y de Puebla en lo específico.

Existen innumerables ejemplos: Legisladoras, Ministras, Magistradas, Gobernadoras, dirigentes, líderes sociales, servidores públicos y, en general, una amplia gama de trayectorias exitosas, que representan vivos ejemplos de la lucha por espacios y oportunidades en las diversas áreas de la sociedad.

Pero también existe, el lado oscuro, mujeres y hombres sujetos de conductas discriminatorias, en la marginación que les impide acceder a lo mínimo indispensable, por ello, debemos sentar las bases que rompan la brecha de segregacionismo y las posiciones reduccionistas.

En este sentido, también se contempla, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, misma que fue secundada por los demás Grupos Parlamentarios, el que en la formación educativa se incorporen criterios de equidad, estableciendo la garantía de que los planes de estudio, los enfoques pedagógicos, los métodos didácticos, así como los textos, publicaciones y material de apoyo docentes, contengan los principios y valores que expongan la igualdad entre hombres y mujeres. Así como incorporar los criterios de igualdad en todos los niveles educativos orientados a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres; la orientación y capacitación al personal docente en las prácticas educativas para la igualdad; y la eliminación de los estereotipos tradicionales de dependencia de la mujer y fomentar la responsabilidad compartida de derechos y obligaciones del hombre y la mujer, así como el principio de colaboración y solidaridad.

Comprometidos a participar con las instancias gubernamentales y las organizaciones sociales en la implementación de políticas públicas encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de todas las poblanas, generando para ello las reformas o leyes que sean necesarias.

Es con esta convicción que la presente Ley inserta en perspectiva de género la transversalidad de la atención pública integral, para mujeres y hombres que esperan justicia y equidad social.

Proponemos fortalecer la institucionalización de una cultura por la equidad de género, pues no debemos olvidar que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser una práctica cotidiana en todos los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de los que somos parte.

Este ideal representa una exigencia insoslayable para generar las condiciones mínimas y necesarias que permitan que las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos sin distinción, mucho menos de género.

La convivencia civilizada bajo un orden de respeto común requiere de la intervención del poder público, para impulsar los mecanismos necesarios que superen las desigualdades y la discriminación que todavía nos aquejan.

Por ello, resulta fundamental, el contar con la normatividad que contemple y soporte de manera particular, todos y cada uno de los elementos que coadyuven a la consolidación de esa igualdad.

Esta iniciativa plantea mecanismos y disposiciones obligatorias para las autoridades tanto del Gobierno del Estado como de los Municipios, sobre equidad de género.

Con la finalidad de coordinar las acciones de los Poderes Públicos, encaminadas a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, es fundamental la colaboración de los Poderes del Estado, de las Dependencias y Entidades y de las Organizaciones no gubernamentales, las que de manera

coordinada en el ámbito de sus competencias coadyuvarán en el cumplimiento, exigencia y vigilancia de las políticas implementadas.

La presente Ley, representa el instrumento jurídico para la operación de políticas públicas, como lo serán el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se propone impulsar para tal fin, que los Gobiernos Estatal y Municipales, puedan celebrar convenios o acuerdos de coordinación, que amplíen las posibilidades de cumplir con los objetivos de este ordenamiento.

La presente Ley plantea además, la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

a) La participación y representación política equilibrada, incorporando la obligación para los Gobiernos Estatales y Municipales de instrumentar los mecanismos necesarios para alcanzar una participación política bajo el principio de igualdad de género, generando así, que la representatividad de los diversos cargos públicos sea plural y equitativa entre mujeres y hombres.

El presente ordenamiento faculta a las Autoridades, Dependencias y Organismos públicos competentes a que desarrollen diversas acciones tendientes a fomentar la participación equitativa entre mujeres y hombres en cargos públicos, en las estructuras de los partidos políticos, así como fomentar la participación equilibrada en los procesos para seleccionar, contratar y ascender en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

b) Se plantea el fortalecimiento de la vida económica estableciendo entre otros objetivos: la promoción a la igualdad en el trabajo y garantizar el acceso a la capacitación y el adiestramiento.

c) La igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos sociales es otro avance, que incluye el compromiso de mejorar las condiciones de las mujeres en el ámbito del desarrollo social, difundiendo en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad.

d) Se contempla la igualdad en el ámbito civil, cuyo objetivo se centra en erradicar todo tipo de violencia de género que se pudiera suscitar, así como evaluar la legislación en materia de igualdad y promover los derechos específicos que tienen las mujeres.

e) Se promueve la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, con el fin de que las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán todo tipo de acciones tendientes a eliminar los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

f) El derecho a la información y la participación social se incluye. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades competentes, pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres, así mismo, los gobiernos Estatal y Municipal promoverán la participación de la sociedad en la planeación, diseño formulación y ejecución de los programas y acciones tendientes a aplicar la política de igualdad entre mujeres y hombres.

Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, se establecen como objetivos de la Política Estatal el mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social; el supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad; y el revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Es importante concientizar a los servidores públicos encargados de la aplicación de esta norma, que son ellos quienes garantizarán la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que su incumplimiento podrá ser sancionado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17 fracción XI, 43 fracciones I y X, 69 fracción II, 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20, 21, 22, 24 fracciones I y X, 93 fracción VII del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones aplicables, se emite la siguiente:

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio del Estado de Puebla y tiene por objeto:

I.- Establecer el marco jurídico necesario a fin de hacer cumplir las obligaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado de Puebla;

II.- Generar las condiciones idóneas para lograr la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de género;

III.- Definir los principios de actuación de los Poderes Públicos del Estado y de sus Municipios, a fin de prever las medidas necesarias y suficientes para eliminar y corregir en el sector público y privado, toda forma de discriminación por razón del sexo;

IV.- Establecer las bases de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y de éstos con la sociedad civil para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres; y

V.- Garantizar a las mujeres y a los hombres el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las personas, sobre la base de la igualdad de oportunidades con equidad de género, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; en concordancia con los instrumentos nacionales y los internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en el territorio del Estado, que por razón de su sexo, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o de nacionalidad, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

Esta Ley se fundamenta en el reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer para todos los actos jurídicos, por lo que las leyes que aún mantengan normas que excluyan o atenúen su capacidad jurídica, son consideradas como discriminatorias a los efectos de esta.

Artículo 3.- Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los Poderes Públicos del Estado de Puebla y de sus Municipios en materia de igualdad de mujeres y hombres son los siguientes:

I.- Igualdad de trato: Entendida como la prohibición de toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta, cualquiera que sea la forma utilizada para ello y para efectos de esta Ley:

a) Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga, por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con éste, como sería el embarazo o la maternidad.

b) Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra, perjudique a una población sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterios o práctica resulte adecuada y necesaria y puede justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.

c) No se consideran constitutivas de discriminación por razón de sexo, las medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico o de cuidado de las personas.

II.- Igualdad de oportunidades: Se refiere a la obligación de los Poderes Públicos del Estado de Puebla y de los Municipios de adoptar las medidas necesarias y oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de sus derechos

políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluido el control y acceso al poder; así como a los recursos y beneficios económicos y sociales. Para efecto de esta Ley la igualdad de oportunidades se ha de entender referida no solo a las condiciones de partida o de inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el ejercicio de aquellos;

III.- Respeto a la diversidad y a la diferencia: Conceptualizado como el compromiso de los Gobiernos Estatal y Municipales, de instrumentar los mecanismos y estrategias necesarias para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice, sin descuidar el necesario respeto tanto a la diversidad y las diferencias existentes entre mujer y hombre en cuanto a su condición biológica, psicológica, social, cultural y de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y hombres;

IV.- Integración de la perspectiva de género: Para efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género a la consolidación sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actualizaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

Los Poderes Públicos del Estado y sus Municipios, habrán de incorporar las perspectivas de género en todas sus políticas y acciones, de modo que se establezca en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres;

V.- Acción positiva: Son el conjunto de medidas específicas y temporales en favor de las mujeres para eliminar situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres que los Poderes Públicos adoptarán;

VI.- Roles y estereotipos en función del sexo: Concebida como una deformación cultural sobre la que se sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres y según la cual se asigna a las mujeres la responsabilidad del ámbito de lo doméstico y a los hombres el del público, con una muy desigual valoración y reconocimiento económico y social;

VII.- Representación equilibrada: Se considera que existe representación equilibrada en los órganos administrativos del Estado y los Municipios cuando ambos sexos están representados de

manera proporcional a su participación, de tal manera que se logre la toma de decisiones de manera corresponsable y conjunta; y

VIII.- Colaboración y coordinación: Los Poderes Públicos del Estado y sus Municipios tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres para que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una actualización racional de los recursos.

Asimismo, han de proveer la colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y entidades, y de fuera de ella, con el fin de garantizar a las mujeres y hombres que radiquen en el territorio del Estado de Puebla, la igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.- Acciones afirmativas: Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres;

II.- Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla;

III.- Instituto: Instituto Poblano de las Mujeres;

IV.- Ley.- La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla;

V.- Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género;

VI.- Poderes Públicos del Estado: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de acuerdo a su organización y funcionamiento conforme a su normatividad aplicable y los demás que la legislación reconozca como autoridad;

VII.- Principio de Igualdad: Posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias del género al que pertenezcan;

VIII.- Programa: Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

IX.- Sistema Estatal: Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

X.- Transversalidad: Los principios de igualdad entre mujeres y hombres deben estar presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas por los Órganos de Gobierno. Este enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad. Por ello las actuaciones y medidas impulsadas por la administración buscarán ser ejemplares.

Artículo 5.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el Decreto que Crea el Instituto Poblano de las Mujeres y demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

TÍTULO II DE LAS AUTORIDADES, SU ATRIBUCIÓN Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 7.- Serán autoridades en la aplicación del presente ordenamiento las siguientes:

- 1.-** El Gobierno del Estado;
- 2.-** Los Municipios; y
- 3.-** El Instituto Poblano de las Mujeres.

CAPÍTULO PRIMERO DEL GOBIERNO ESTATAL

Artículo 8.- Al Gobierno del Estado, le corresponde:

I.- Elaborar y conducir la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a fin de cumplir con lo establecido en la presente Ley;

II.- Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, garantizada en esta Ley;

III.- Establecer las acciones orientadas a lograr la igualdad de oportunidades con equidad de género, de manera prioritaria;

IV.- Fomentar la participación social y política dirigida a lograr una efectiva participación ciudadana;

V.- Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a servicios de salud de calidad, para todas las personas, sin discriminación, especialmente en zonas rurales e indígenas; a través del Sistema de Salud Pública;

VI.- Promover el acceso a todos los ámbitos y niveles de educación de calidad, con énfasis en la educación rural e indígena, así como la erradicación de los prejuicios sexistas en estos ámbitos;

VII.- Fomentar el acceso a proyectos productivos, financieros y tecnológicos, particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural y lingüística;

VIII.- Propiciar el empleo de las mujeres jefas de hogar y de las personas con discapacidad;

IX.- Coordinar las acciones para lograr la transversalidad de la perspectiva de género, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la Ley señala;

X.- Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;

XI.- Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género; y

XII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las demás aplicables, corresponde a los Municipios:

I.- Implementar la Política Municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con la Política Estatal correspondiente;

II.- Coadyuvar con los diversos órdenes de gobierno en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

III.- Realizar las previsiones presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad, en términos de la legislación aplicable;

IV.- Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley le confiere;

V.- Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales e indígenas;

VI.- Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género; y

VII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.

TÍTULO III
DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA POLÍTICA

Artículo 10.- La Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones tendientes a lograr la igualdad en el ámbito, económico, político, social y cultural.

La Política Estatal que establezca el Gobierno del Estado deberá considerar los siguientes lineamientos:

I.- Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II.- Incluir en la planeación presupuestal las partidas necesarias para sustentar acciones que impulsen la perspectiva de género, apoye la transversalidad y aseguren el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres;

III.- Generar los mecanismos necesarios para lograr una efectiva participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

IV.- Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V.- Adoptar medidas para garantizar a mujeres y hombres la igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder;

VI.- Propiciar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; y

VII.- Impulsar la modificación de los patrones culturales que permita la erradicación de estereotipos establecidos en función del sexo.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES

Artículo 11.- Los objetivos y acciones de esta Ley estarán encaminados a contar con un marco jurídico idóneo que propicie la eliminación de cualquier forma de discriminación; defina los principios básicos de la actuación del Poder Público y establezca las bases de coordinación para la integración y funcionamiento de un Sistema Estatal que asegure las condiciones necesarias tendientes a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 12.- Los Poderes Públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres para lo cual deberán propiciar:

I.- El derecho a una vida libre de discriminación por razón de sexo;

II.- La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a lograr el pleno desarrollo de los individuos; para contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares se promoverá el reconocimiento del derecho de los padres a un permiso por paternidad de ocho días;

III.- El acceso a la información pública necesaria para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, como sería: políticas, instrumentos y normas relativas a estas acciones;

IV.- La difusión de los valores culturales necesarios para eliminar los estereotipos de género; y

V.- La concientización de la sociedad para erradicar la violencia de género.

Artículo 13.- La Política Estatal, definida en el Programa Estatal y encauzada a través del Sistema Estatal, deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos y acciones a que se refiere este Capítulo.

Artículo 14.- El Gobierno del Estado, a través de la dependencia competente, garantizará que los planes de estudio, los enfoques pedagógicos, los métodos didácticos, así como los textos, publicaciones y material de apoyo docentes, contengan los principios y valores que expongan la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo tendrá que:

I.- Incorporar los criterios de igualdad en todos los niveles educativos orientados a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres;

II.- Orientar y capacitar al personal docente en las prácticas educativas para la igualdad; y

III.- Eliminar los estereotipos tradicionales de dependencia de la mujer y fomentar la responsabilidad compartida de derechos y obligaciones del hombre y la mujer, así como el principio de colaboración y solidaridad.

Artículo 15.- El Estado dictará las medidas necesarias para que todas las edificaciones e instalaciones de uso público dispongan de los servicios, equipamiento y facilidad que sean requeridos para su utilización por personas de uno u otro sexo.

CAPÍTULO TERCERO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 16.- Tratándose de igualdad entre mujeres y hombres, son instrumentos de la Política Estatal los siguientes:

I.- El Sistema Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres;

II.- El Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres; y

III.- La observancia en materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 17.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.

CAPÍTULO CUARTO DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 18.- El Sistema Estatal, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que convienen los Poderes Públicos del Estado entre sí, con la sociedad civil organizada y con instituciones académicas y de investigación, que tiene como fin promover, planear, elaborar y en su caso aplicar las medidas necesarias para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.

Artículo 19.- El Instituto coordinará las acciones que el Sistema Estatal genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su Decreto de creación, y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con otros de carácter similar o análogo.

Artículo 20.- Corresponde al Instituto la realización de las siguientes funciones:

I.- Proponer los lineamientos para la Política Estatal en los términos de las Leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo del Estado;

II.- Coordinar el programa de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;

III.- Promover, coordinar y realizar la revisión del programa y servicios en materia de igualdad;

IV.- Formular propuestas a las autoridades competentes sobre la asignación de los recursos que requiera el programa de igualdad entre mujeres y hombres;

V.- Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración Pública Estatal para formar y capacitar a su personal en materia igualdad entre mujeres y hombres;

VI.- Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres; y

VII.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 21.- El Sistema Estatal deberá:

I.- Aprobar las bases y lineamientos en materia de acciones afirmativas a efecto de eliminar la violencia y la discriminación entre mujeres y hombres;

II.- Impulsar el progreso legislativo en materia de igualdad, a fin de armonizar la legislación local;

III.- Diseñar las políticas públicas, el programa y servicios en materia de igualdad;

IV.- Evaluar la necesidad específica de las asignaciones presupuestarias destinadas a ejecutar el programa y planes estratégicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

V.- Organizar a la sociedad civil en la participación de debates públicos con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres;

VI.- Formar y capacitar a los servidores públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que laboran en los Gobiernos Estatal y Municipales;

VII.- Implementar y definir los estándares que difundan en los medios de comunicación y órganos de comunicación social de los distintos Poderes Públicos la imagen igualitaria, plural y libre de estereotipos de mujeres y hombres;

VIII.- Otorgar un reconocimiento a las empresas que se distingan por instrumentar medidas tendientes a fomentar y mantener la igualdad entre mujeres y hombres;

IX.- Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, así como establecer los medios y mecanismos tendientes a la convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo humano;

X.- Establecer los instrumentos y medidas necesarias que tiendan a lograr la erradicación del acoso sexual; y

XI.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y las que determinen las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO QUINTO DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 22.- El Programa Estatal, será propuesto por el Instituto y tomará en cuenta las necesidades de los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región.

El Programa Estatal deberá integrarse al Plan Estatal de Desarrollo, así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; en congruencia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Los programas que elaboren los Municipios, con visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Estatal de igualdad en congruencia con los programas estatales.

Artículo 23.- El Instituto deberá revisar el Programa Estatal de forma anual, a fin de procurar ante las instancias competentes su permanente actualización.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 24.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que tengan relación con la materia de esta Ley, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los Municipios que conforman la Entidad y con asociaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, pudiendo contar con la coparticipación del Instituto Poblano de las Mujeres, a fin de:

I.- Establecer acciones orientadas a eliminar la discriminación y a fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres;

II.- Lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública Estatal y Municipal;

III.- Impulsar y fortalecer la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema Estatal;

IV.- Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan al diseño e instrumentación de una estrategia estatal;

V.- Proponer la incorporación de contenidos y métodos de enseñanza en todos los niveles educativos, orientados a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, que contribuyan a la igualdad entre éstos;

VI.- Generar las estrategias que contribuyan a formar, orientar y capacitar al personal docente en las prácticas educativas para la igualdad de género; y

VII.- Diseñar, elaborar y en su caso proponer iniciativas y políticas de cooperación, a fin de lograr la instrumentación y el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida política, social, cultural y civil.

Artículo 25.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación los Gobiernos Estatal y Municipales, deberán tomar en consideración los recursos presupuestales, materiales y humanos

disponibles, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente.

Artículo 26.- Los Municipios coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Estatal.

Asimismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas municipales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el Sistema Estatal.

Artículo 27.- En la concertación de acciones entre el Estado y el sector privado, los instrumentos jurídicos que para tal efecto se signen, se ajustarán a las siguientes bases:

I.- Definición de los objetivos, alcances y metas que se pretenden alcanzar con la suscripción;

II.- Delimitación precisa de las responsabilidades que asuman las y los representantes de los sectores social y privado participantes; y

III.- Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores llevarán a cabo en coordinación con las instituciones correspondientes.

Artículo 28.- En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este Capítulo, podrá intervenir el área responsable de la Comisión, de acuerdo con las atribuciones que su propia Ley le confiere.

**TITULO IV
DE LOS DERECHOS DE MUJERES Y HOMBRES**

**CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
POLÍTICA EQUILIBRADA**

Artículo 29.- La participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas será definida a través de los mecanismos de operación de la Política Estatal.

Artículo 30.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;

II.- Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;

III.- Evaluar por medio del área competente de la Comisión, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;

IV.- Promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos;

V.- Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos;

VI.- Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil; y

VII.- Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA VIDA ECONÓMICA Y LABORAL

Artículo 31.- La vida económica se fortalecerá mediante los siguientes objetivos:

I.- Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

II.- Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica;

III.- Impulsar liderazgos igualitarios;

IV.- Salvaguardar, velar y promover la participación de la mujer en el sector productivo; y

V.- Garantizar el acceso a la capacitación, adiestramiento y asesoramiento técnico de comercialización y distribución.

Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes, desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;

II.- Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas;

III.- Garantizar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente;

IV.- Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos estatales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia estatal laboral;

V.- Reforzar la cooperación entre el Gobierno del Estado y los Municipios, para supervisar, en su caso, la aplicación de las acciones que establece el presente artículo;

VI.- Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres;

VII.- Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;

VIII.- Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, en el mercado de trabajo;

IX.- Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración pública;

X.- Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género; y

XI.- Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

Artículo 33.- Las bases normativas de las relaciones de la mujer en el trabajo están constituidas por el derecho al trabajo y la igualdad de acceso a todos los empleos a cargos, ascensos, oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo.

Artículo 34.- Se prohíbe despedir o presionar a la mujer trabajadora o menoscabar sus derechos con motivo de su estado de gravidez o embarazo; en este caso, la atención médica se proporcionará de forma integral.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES

Artículo 35.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Estatal:

I.- Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social;

II.- Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianidad; y

III.- Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Garantizar el seguimiento y la evaluación de la legislación existente, en armonización con instrumentos nacionales e internacionales;

II.- Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en la sociedad;

III.- Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad;

IV.- Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social;

V.- Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y la salud; y

VI.- Promover campañas estatales de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.

CAPÍTULO CUARTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO CIVIL

Artículo 37.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, será objetivo de la Política Estatal:

- I.-** Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
- II.-** Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales; y
- III.-** Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Artículo 38.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:

- I.-** Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de retribución;
- II.-** Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el trabajo;
- III.-** Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
- IV.-** Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres;
- V.-** Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres con organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo;
- VI.-** Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;

VII.- Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres; y

VIII.- Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO QUINTO DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO

Artículo 39.- Será objetivo de la Política Estatal la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes desarrollarán las siguientes acciones:

I.- Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género;

II.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y

III.- Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.

CAPITULO SEXTO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 41.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes, pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas,

instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres, circunscribiéndose a las formalidades que impone la Ley de la materia.

Artículo 42.- Los Gobiernos Estatal y Municipales, a través de sus dependencias y entidades paraestatales, instrumentarán las estrategias y mecanismos necesarios a fin de promover la participación de la sociedad en la planeación, diseño, formulación, ejecución y evaluación de los programas y acciones derivadas de la aplicación de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley.

Artículo 43.- El Ejecutivo Estatal, por conducto del Sistema Estatal, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta Ley.

Artículo 44.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA OBSERVANCIA

Artículo 45.- La observancia deberá ser realizada por personas de reconocida trayectoria y especializadas en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 46.- La Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres consistirá en:

I.- Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II.- Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad;

III.- Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;

IV.- Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; y

V.- Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

CAPÍTULO OCTAVO DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 47.- La trasgresión a los principios y programas que esta Ley prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y, en su caso, por las Leyes aplicables que regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito previsto por el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.